

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 31595, LEY QUE PROMUEVE LA DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y ESTABLECE EL RETIRO DEL CABLEADO AÉREO EN DESUSO O EN MAL ESTADO EN LAS ZONAS URBANAS DEL PAÍS

I. OBJETO

La propuesta de reglamento de la Ley 31595 tiene por objeto establecer disposiciones que regulen la identificación y retiro de las redes de cableado aéreo en desuso o en mal estado, de los servicios de electricidad y de telecomunicaciones, en las zonas urbanas del país, dentro de los alcances de la Ley N° 31595, Ley que promueve la descontaminación ambiental y establece el retiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado en las zonas urbanas del país, con enfoque en gestión ambiental y seguridad de las personas.

II. FINALIDAD

La finalidad del Decreto Supremo es promover la descontaminación ambiental a través del retiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado en las zonas urbanas del país, con enfoque en gestión ambiental y seguridad de las personas.

III. ANTECEDENTES

El 28 de octubre de 2022, se publicó la Ley N° 31595, Ley que promueve la descontaminación ambiental y establece el retiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado en las zonas urbanas del país, estableciendo en la única disposición complementaria transitoria su reglamentación por parte del poder ejecutivo.

IV. MARCO JURÍDICO

El inciso 3) del artículo 11 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que los decretos supremos son normas de carácter general que reglamentan normas con rango de ley o regulan la actividad sectorial funcional o multisectorial funcional a nivel nacional. Asimismo, dichas normas son rubricadas por el presidente de la república y refrendadas por uno o más ministros a cuyo ámbito de competencia correspondan.

Al respecto, de acuerdo al artículo 4 de la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, la LOF del MTC), se ha dispuesto que, en lo que se refiere al sector comunicaciones, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ostenta competencia exclusiva en materia de infraestructura y servicios de comunicaciones, así como competencia compartida en materia de promoción

de la infraestructura de telecomunicaciones y el planeamiento de los servicios de telecomunicaciones de alcance regional.

Seguidamente, el inciso 2) del artículo 5 de la referida ley establece que es función rectora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones: *“dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución, supervisión y evaluación de las políticas, la gestión de los recursos del sector, así como para el otorgamiento y reconocimiento de derechos, la sanción, la fiscalización y ejecución coactiva en materias de su competencia.”*.

Asimismo, de acuerdo al inciso 2) del artículo 6 de la LOF del MTC, se ha contemplado como función específica de competencia exclusiva del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en materia de comunicaciones administrar, supervisar y evaluar los servicios públicos de telecomunicaciones, servicios de radiodifusión y servicios privados de telecomunicaciones.

De otra parte, el 29 de junio de 2016, se publicó la Ley N° 30477, Ley que regula la ejecución de obras de servicios públicos autorizadas por las municipalidades en las áreas de dominio público, en el que se estableció disposiciones que regulan los procedimientos para ejecución de obras de servicios públicos de saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, gas natural y de servicios públicos locales, con la finalidad de mitigar el impacto negativo en las áreas de dominio público, en favor de los ciudadanos, que autoricen las municipalidades.

En relación a ello, es oportuno mencionar que con fecha 28 de octubre de 2022, se publicó la Ley N° 31595, Ley que promueve la descontaminación ambiental y establece el retiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado en las zonas urbanas del país, con el objeto de establecer la descontaminación ambiental mediante el retiro del cableado aéreo de los servicios de electricidad y de telecomunicaciones que se encuentren en desuso o mal estado en las zonas urbanas del país, a fin de garantizar la seguridad de la población y el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado.

Asimismo, la única disposición complementaria transitoria final de la citada ley encargó al Poder Ejecutivo su reglamentación en el plazo de noventa (90) días calendarios.

Cabe indicar, que con Oficio N° D003937-2023-PCM-SC, de fecha 03 de abril de 2023, la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros indicó que si bien, la reglamentación de la Ley 31595 se trata de un dispositivo de carácter multisectorial que requiere los aportes de diversos sectores ministeriales, corresponde asumir al MTC la conducción del proceso de reglamentación, siendo el sector encargado de conducir y emitir el decreto supremo que contenga la reglamentación de la citada ley, con los refrendos de los sectores competentes.

En ese orden de ideas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el marco de sus competencias se encuentra facultado para emitir un decreto supremo que apruebe el reglamento de la Ley N° 31595, Ley que promueve la descontaminación ambiental y establece el retiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado en las zonas urbanas del país, a efectos de establecer disposiciones que regulen la identificación y retiro de las redes de cableado aéreo en desuso o en mal estado de los servicios de electricidad y de telecomunicaciones en las zonas urbanas del país.

V. FUNDAMENTO TÉCNICO DE LA PROPUESTA NORMATIVA

La provisión de los servicios públicos como los de telecomunicaciones y electricidad han sido prioridad del Estado peruano, a fin de reducir la brecha en la prestación de servicios y promover el acceso universal de los mismos, por tal motivo se ha impulsado una serie de medidas para su desarrollo y despliegue. Esta expansión, ha sido acompañada por un despliegue significativo de infraestructura, incluyendo el cableado aéreo. Sin embargo, esta expansión no ha estado exenta de consecuencias, la cual ha generado preocupación ambiental y potenciales riesgos para la seguridad de las personas.

En ese sentido, a continuación, se describen las características particulares de este desarrollo para cada uno de estos sectores mencionados.

Respecto del sector Telecomunicaciones

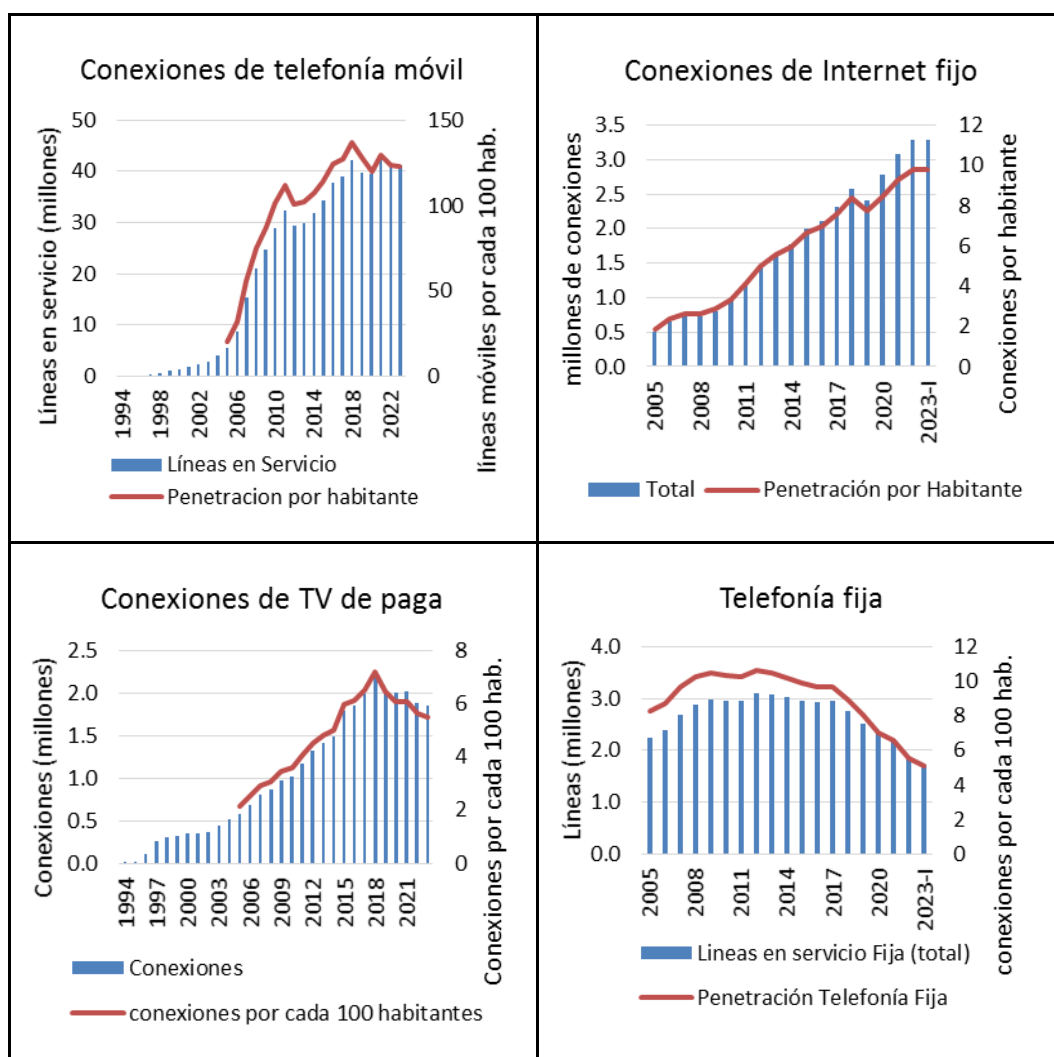
El desarrollo de las telecomunicaciones ha facilitado las comunicaciones y el intercambio de información, lo cual ha contribuido al desarrollo económico y social al facilitar, entre otros, el comercio, la educación, la salud y nuevas posibilidades de negocios.

En ese sentido, en el Perú, hasta el año 1994, la prestación del servicio de comunicación por voz era prestada de forma monopólica, con solo 3 líneas telefónicas por cada 100 habitantes (MTC, 2023)¹. A partir de entonces, el Estado peruano estableció un conjunto de reformas que coadyuvaron a la expansión de los servicios de telecomunicaciones en el país, entre las cuales, conllevó a la privatización de la empresa estatal de telecomunicaciones con la creación del Organismo Supervisor de la Inversión en Telecomunicaciones (OSIPTEL) y el desarrollo de un marco regulatorio orientado a promover la inversión en infraestructura en el sector.

Teniendo en cuenta lo señalado, se puede advertir que los diversos servicios de telecomunicaciones han mostrado una dinámica diferente en el tiempo, como por ejemplo, las líneas con servicio móvil se han incrementado de forma sustancial desde el año 1994, alcanzando las 122.8 conexiones por cada 100 habitantes al primer trimestre del año 2023, en esa misma línea, las conexiones a internet fijo alcanzaron las 9.8 conexiones por cada 100 habitantes. Por otro lado, el servicio de telefonía fija alcanzó su apogeo en el año 2014, donde se tuvo 10.6 conexiones por cada 100 habitantes, este indicador ha mostrado, desde entonces, una disminución significativa, alcanzando las 5.1 conexiones por cada 100 habitantes al primer trimestre de 2023. Una tendencia similar se observa en el servicio de televisión de paga, que pasó 6.5 conexiones por cada 100 habitantes en el 2019, a 5.5 al primer trimestre de 2023. De lo señalado, se puede visualizar en el Gráfico N° 1:

¹ MTC (2023). Un viaje desde el pasado hacia el futuro de las telecomunicaciones en el Perú. Lima: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/4235332-un-viaje-desde-el-pasado-hacia-el-futuro-de-las-telecomunicaciones-en-el-peru>

Gráfico N° 1: Conexiones por tipo de servicio



Elaboración: DGPRC-MTC. Fuente: Punku - Osiptel.

Teniendo en cuenta lo señalado, la evolución del número de conexiones de telecomunicaciones ha requerido un despliegue significativo de infraestructura, sin embargo, esta infraestructura está expuesta al riesgo de volverse obsoleta o sufrir daños con el paso del tiempo.

Además, la disminución de las conexiones de telefonía fija y televisión de paga está generando un escenario en el que la infraestructura existente, incluyendo los cables de telecomunicaciones, se encuentra en proceso de obsolescencia. Esta situación es resultado de diversos factores que influyen en las preferencias de los usuarios y en el cambio de tecnologías de comunicación.

En ese sentido, las empresas de telecomunicaciones se enfrentan al desafío de mantener y actualizar una infraestructura costosa y extensa que ya no es plenamente utilizada. Los cables de telecomunicaciones, que en el pasado eran fundamentales para transmitir señales de voz y video, están siendo subutilizados o incluso quedando en desuso.

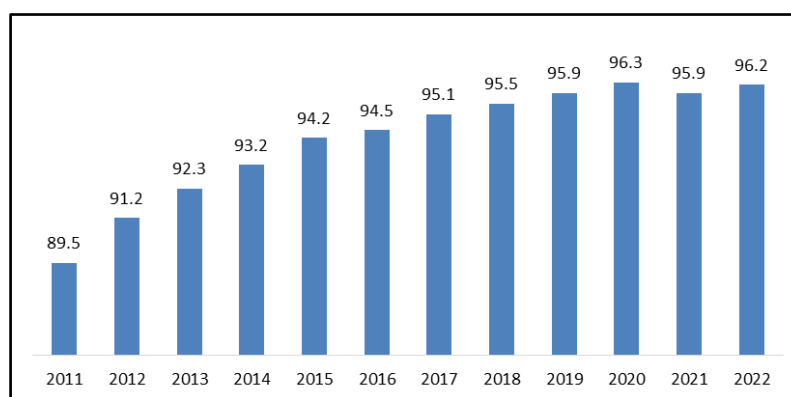
Respecto del sector Eléctrico

El desarrollo del sector eléctrico en el Perú ha estado estrechamente ligado al crecimiento de la actividad productiva y ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento económico del país. De este modo, desde la puesta en marcha de la primera central eléctrica en el año 1884 por la empresa minera Tarifas en Huaraz, se han establecido una serie de centrales eléctricas para satisfacer la demanda tanto de los hogares como de las empresas que han adoptado progresivamente la energía eléctrica en sus procesos productivos (Tamayo et al., 2016)².

En este contexto, la provisión de energía eléctrica se ha vuelto indispensable tanto para la actividad productiva como para los usuarios residenciales. Esto ha requerido el despliegue de infraestructuras de generación, transporte y distribución eléctrica, que han incluido la instalación de postes y el tendido de cableado aéreo. Estos elementos de infraestructura han sido necesarios para llevar la electricidad desde las centrales de generación hasta los puntos de consumo.

Si bien la proliferación del cableado aéreo en el sector eléctrico ha permitido una rápida expansión de la red eléctrica y contribuido a incrementar el acceso de la población a la electricidad – como se observa en el siguiente gráfico, al año 2022 el 96.2% de la población cuenta con energía eléctrica por red pública – el cableado aéreo presenta inconvenientes relacionados a la presencia de cables en desuso o en mal estado, que pueden afectar la estética del entorno urbano, o incluso incrementar el riesgo de accidentes. Lo señalado, se ve reflejado en el gráfico N° 2:

Gráfico N°2: Proporción de la población con energía eléctrica, 2011 - 2022



² Tamayo, J.; Salvador, J.; Vásquez, A. & Vilches, C. (Editores) (2016). La industria de la electricidad en el Perú: 25 años de aportes al crecimiento económico del país. Lima: Osinergmin. Disponible en: https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Libros/Osinergmin-Industria-Electricidad-Peru-25anios.pdf

Fuente: INEI (2023)³

Teniendo en cuenta lo señalado, se puede advertir que el incremento de la instalación del cableado aéreo para la prestación de los servicios de telecomunicaciones y de electricidad se ha venido llevando a cabo de forma desordenada ocasionando que actualmente exista una gran acumulación de cableado en desuso y/o mal estado, tanto del sector eléctrico y de telecomunicaciones; situación que ha generado un alto índice de contaminación visual y un riesgo a la seguridad de los ciudadanos.

Se ha de advertir que, los cables ya sean de cobre (par trenzado, coaxial) o de fibra óptica, por sus componentes llevan las señales de transmisión de datos en forma de señales eléctricas o de campos electromagnéticos (luz coherente), a través de los cables de alimentación, distribución y acometida hasta los equipos receptores/transmisor de los usuarios.

De esa forma, resulta importante tener en cuenta que, la acumulación del cableado aéreo genera residuos sólidos con su retiro por lo que, se hace necesario que, las empresas concesionarias y el proveedor de infraestructura pasiva (en adelante, las empresas), las cuales serán los generadores de residuos, puedan gestionar correctamente los cables (residuo), más aún cuando en el marco del presente reglamento, se busca su retiro.

En ese sentido, el problema relevante identificado se ha enfocado teniendo en cuenta la situación actual de las zonas urbanas del país, pues en dichos lugares se puede observar que la contaminación visual perturba o distorsiona la visión de un paisaje o zona, además de poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

VI. DEL PROYECTO NORMATIVO

Objeto (artículo 1 del reglamento)

De acuerdo al artículo 21 del Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 007-2022-JUS, las normas legales contienen disposiciones generales como aquellas que fijan el objeto de la norma.

En la misma línea, la Guía de Técnica Legislativa para la elaboración de Proyectos Normativos de las Entidades del Poder Ejecutivo⁴, establece lo siguiente sobre el objeto de una norma legal: *“El objeto es la parte dispositiva de la norma en la que se identifica la materia o asunto que se pretende regular. Es real, fáctico, viable y único.”*

En cumplimiento a lo señalado, el artículo 1 del proyecto de reglamento dispone que su objeto consiste en establecer disposiciones que regulen la identificación y

³ INEI (2023). Condiciones de vida en el Perú. Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2023. Informe Técnico N° 02 Junio 2023. Disponible en <https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/02-informe-tecnico-condiciones-de-vida-ene-feb-mar-2023.pdf>

⁴ Disponible en el siguiente enlace: <https://www.gob.pe/institucion/minjus/informes-publicaciones/276702-guia-tecnica-legislativa-para-la-elaboracion-de-proyectos-normativos-de-las-entidades-del-poder-ejecutivo>

retiro de las redes de cableado aéreo en desuso o en mal estado, de los servicios de electricidad y de telecomunicaciones, en las zonas urbanas del país, dentro de los alcances de la Ley N° 31595, lo cual se sustenta en el mandato contenido en su única disposición complementaria transitoria, la cual encarga al Poder Ejecutivo su reglamentación.

Ámbito de aplicación (artículo 2 del reglamento)

La Ley N° 31595, establece la descontaminación ambiental mediante el retiro del cableado aéreo de los servicios de electricidad y de telecomunicaciones que se encuentren en mal estado o en desuso en las zonas urbanas del país.

Teniendo en cuenta lo señalado en el párrafo precedente, corresponde establecer el ámbito de aplicación del reglamento. En ese sentido, la norma es aplicable a las empresas concesionarias de servicios de electricidad y de telecomunicaciones, las empresas proveedoras de infraestructura pasiva, así como para el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en tanto no haya transferido la competencia de fiscalización ambiental del sector comunicaciones al OEFA; y las Municipalidades Provinciales y Distritales. Asimismo, las Municipalidades y las Entidades de Fiscalización Ambiental coordinan con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), según corresponda.

Es oportuno mencionar que, cuando la Ley N° 31595 menciona a los concesionarios del servicio de electricidad se está haciendo referencia a las empresas titulares de una concesión definitiva de energía eléctrica otorgada de conformidad con el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas (en adelante, LCE), en ese sentido, los destinatarios de la referida Ley son las empresas de distribución eléctrica que cuentan para tal efecto con el título habilitante de concesión definitiva debidamente otorgada por la autoridad competente.

Al respecto, es oportuno mencionar que el artículo 2 del reglamento cumple con lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 007-2022-JUS, donde establece que las normas legales contienen disposiciones generales como aquellas que fijan el ámbito de aplicación de la norma.

Definiciones (artículo 3 del reglamento)

A fin de facilitar la comprensión del proyecto del reglamento, en el artículo 3 del mismo se establecen las definiciones que son parte del desarrollo de los alcances necesarios de la Ley N° 31595; así como también incluye las siglas de los órganos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y otras entidades que tienen participación dentro del citado proyecto.

Al respecto, es importante precisar que el numeral 11 del artículo 3 del proyecto señala que el carácter de declaración jurada del documento abarca la identificación, descripción y características del cableado en desuso o en mal estado, así como el plano de ubicación, toda vez que la Entidad de Fiscalización Ambiental (en adelante, EFA) competente requerirá de esta información a fin de supervisar el cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 3 de la Ley N°

31595⁵. En ese sentido, en caso que el administrado proporcione datos falsos respecto de la identificación y características del cableado que debe retirarse, estaría afectando la eficacia de la fiscalización ambiental.

Por otro lado, cabe indicar que no tendrían calidad de declaración jurada el cronograma de ejecución de las acciones de retiro de cableado y la propuesta de desvíos y señalización (en caso corresponda), así como las acciones de mitigación o contingencia ante eventualidades que podrían generarse en el retiro de cableado y el manejo de los residuos sólidos generados, toda vez que estos datos forman parte de las acciones a adoptar por las empresas concesionarias y proveedores de infraestructura pasiva a fin de dar cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 3 de la Ley N° 31595.

Al respecto, cabe señalar que los referidos órganos del MTC se encuentran reconocidos y sus funciones son detalladas en el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 658-2021-MTC/01, el cual es el documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de una entidad y que determinó la naturaleza jurídica del MTC, como un ministerio del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público y que constituye pliego presupuestal.

Identificación del cableado aéreo en mal estado o en desuso (artículo 4 del proyecto de reglamento)

El artículo 4 del reglamento regula la identificación del cableado aéreo a cargo de las empresas concesionarias y del proveedor de infraestructura pasiva, en tanto se trate de redes de cableado en mal estado o en desuso y que se ubiquen en zonas urbanas.

Para ello, se dispone que, a partir de la entrada en vigencia del reglamento, dichas empresas tienen la obligación de identificar el cableado de su titularidad, de acuerdo a los siguientes plazos:

- Un plazo máximo de seis (6) meses, para identificar y comunicar a la EFA el cableado aéreo en desuso que debe ser retirado dentro del plazo de 24 meses contado desde la entrada en vigencia del reglamento.
- Un plazo máximo de doce (12) meses, para identificar y comunicar a la EFA el cableado aéreo en mal estado que debe ser retirado dentro del plazo de 24 meses contado desde la entrada en vigencia del reglamento.

Transcurrido los plazos de 6 y 12 meses, respectivamente, el proyecto de reglamento permite que las EFA, de oficio, puedan identificar el cableado aéreo

⁵ Ley N° 29325. Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental

Artículo 15.- Facultades de fiscalización

El OEFA, directamente o a través de terceros, puede ejecutar las acciones necesarias para el desarrollo de sus funciones de fiscalización, para lo cual contará con las siguientes facultades:

(...)

c.1 Requerir información al sujeto fiscalizado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales.

en desuso y en mal estado que debe ser retirado por las empresas concesionarios y por el proveedor de infraestructura pasiva, pudiendo dichas empresas cuestionar la identificación del cableado aéreo en desuso y en mal estado cuando se acrediten errores en la identificación del cableado que debe ser objeto de retiro.

Retiro del cableado aéreo en mal estado o en desuso (artículo 5 del reglamento)

El artículo 3 de la Ley N° 31595 establece la obligación a cargo de las empresas concesionarias de servicios de electricidad y de telecomunicaciones, así como las empresas proveedoras de infraestructura pasiva de telecomunicaciones, de retirar el cableado aéreo en desuso o en mal estado que se encuentre en las zonas urbanas, sin trasladar los costos del retiro en las tarifas al público consumidor, en un plazo no mayor a veinticuatro meses, contados desde la entrada en vigencia del proyecto de reglamento.

En tal sentido, a fin de facilitar el cumplimiento de la mencionada norma, el artículo 5 del proyecto de reglamento establece que después de realizado la identificación del cableado aéreo en mal estado o en desuso, se deberá realizar una comunicación formal a la Municipalidad competente adjuntando el Plan de Acciones a ejecutar y precisando la fecha de la ejecución del retiro del referido cableado. Cabe indicar, que bastará una comunicación a la municipalidad sin que sea necesaria iniciar un procedimiento administrativo ni que sea necesaria la emisión de una autorización por parte de la Municipalidad competente. Para el caso del cableado aéreo en mal estado, dicha comunicación también será suficiente, para proceder con el cambio del cableado por uno nuevo o en mejores condiciones.

Asimismo, las empresas concesionarias de servicios de electricidad y de telecomunicaciones, así como también las empresas proveedoras de infraestructura pasiva de telecomunicaciones, deberán comunicar mediante documento formal a la municipalidad competente la finalización del retiro de cableado dentro del plazo de quince (15) días calendarios, después de culminados los trabajos que incluya las labores de limpieza pública. Cabe precisar que, en el supuesto que el retiro del cableado incluye varias intervenciones por tramos o secciones, deberán ser incluidas en el cronograma del Plan de Acciones.

Plazos y horarios de ejecución de retiro de cableado (artículo 6 del proyecto de reglamento)

A efectos de llevar adelante la identificación y retiro del cableado en desuso y en mal estado, se establece un plazo máximo de 24 meses, que será computado desde la entrada en vigencia del reglamento.

Teniendo en cuenta que podrían presentarse marañas de redes de cableados con cierta complejidad en su remoción, las empresas concesionarias o el proveedor de infraestructura pasiva podrán determinar, por cada intervención, sus plazos de ejecución del retiro de cableado en mal estado o en desuso, siendo que, en ningún caso, podrá exceder el plazo de 24 meses antes indicado.

Asimismo, se propone en esta disposición que la municipalidad competente pueda definir los horarios de ejecución del retiro de cableado en mal estado o en desuso, con el propósito de no perjudicar el tránsito de vehículos y peatones.

Municipalidades Distritales y Provinciales (artículo 7 del reglamento)

En el marco de las facultades que le otorga la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley 30477, Ley que regula la ejecución de obras de servicios públicos autorizadas por las municipalidades en las áreas de dominio público, así como las establecidas en la Ley 31595, el proyecto de reglamento propone que las Municipalidades Distritales y Provinciales, en sus respectivos ámbitos de jurisdicción, lo siguiente:

- Comunicar con la debida anticipación a los propietarios de los inmuebles circunscritos al área de ejecución del retiro de cableado en mal estado o en desuso, indicando los plazos de inicio y finalización, así como los accesos y vías que serán afectados por los trabajos, según lo comunicado por las empresas concesionarias o proveedores de infraestructura pasiva en cumplimiento del Plan de Acciones.
- Proporcionar a las empresas concesionarias o el proveedor de infraestructura pasiva que lo soliciten, la información referida a los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, actualizados por el Ministerio de Cultura, que se ubiquen dentro del ámbito de intervención.
- Supervisar en su respectiva jurisdicción, el Plan de Acciones, así como el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, en el marco de sus competencias.

Funciones de fiscalización ambiental del retiro de cableado en mal estado o en desuso (artículo 8 del reglamento)

De acuerdo al numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, Sinefa), el ejercicio de la fiscalización ambiental comprende las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas, entre otras fuentes, en la normativa ambiental vigente.

En ese sentido, en el artículo 4 de la Ley N° 31595 establece que el retiro del cableado queda sujeto a la supervisión ambiental por parte de la entidad de fiscalización ambiental competente, de acuerdo con las normas emitidas en el marco del Sinefa. Por lo tanto, en el caso de las empresas concesionarias de servicios de telecomunicaciones y a los proveedores de infraestructura pasiva (PIP) obligados al retiro del cableado, la competencia de supervisión ambiental le corresponde al MTC, ello mientras no se concluya el proceso de transferencia de funciones y competencias de fiscalización ambiental al OEFA; por su parte, en el caso de las empresas concesionarias de servicios de electricidad, la supervisión ambiental es competencia del OEFA.

Por otro lado, respecto de la fiscalización y sanción ambiental del incumplimiento de la obligación del retiro de cableado de los servicios de electricidad y de telecomunicaciones en desuso o en mal estado, el artículo 5 de la Ley N° 31595 establece que el OEFA sanciona dicho incumplimiento con una multa cuyo monto estará comprendido entre 5 y 20 UIT. Esta potestad sancionadora se ejercerá al término del plazo previsto en la citada Ley para el cumplimiento de la obligación del retiro de cableado, a saber, veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de entrada en vigencia del Reglamento, conforme a lo previsto en el artículo 3 de la Ley. Por lo tanto, el MTC no será competente para imponer sanciones a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y a los proveedores de

infraestructura pasiva que incumplan lo establecido en el artículo 3 de la Ley N° 31595, debido a que tal competencia le ha sido atribuida por la Ley al OEFA.

Supervisión y Fiscalización a cargo de las municipalidades (artículo 9 del reglamento)

La Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, así como Ley N° 30477, Ley que regula la ejecución de obras de servicios públicos autorizadas por las municipalidades en las áreas de dominio público, otorgan a la Municipalidad facultades de supervisión y fiscalización; así como también la potestad de imponer sanciones a las empresas prestadoras que no cumplan con el retiro.

En esa línea, el artículo 4 de la Ley N° 31595, establece que el retiro del cableado está sujeto a la supervisión por parte de la municipalidad, en los aspectos de sus competencias y de conformidad con la citada Ley Orgánica.

En ese sentido, el presente articulado propone que las municipalidades supervisen la correcta ejecución del retiro del cableado en desuso o en mal estado, así como el ejercicio de las actividades de fiscalización e imposición de sanciones.

Intervenciones conjuntas (artículo 10 del reglamento)

El presente artículo propone que las acciones de supervisión y fiscalización del retiro del cableado en mal estado o en desuso que realicen las municipalidades, deben hacerlo conjunta y coordinadamente, cuando dichas acciones comprendan más de un ámbito jurisdiccional.

Por su parte, se prevé que en caso que el retiro del cableado en mal estado o en desuso se realice en áreas protegidas por leyes especiales, la entidad competente deberá realizar el control técnico correspondiente de la ejecución de los trabajos de retiro.

Infracciones y sanciones (artículo 11 del reglamento)

De conformidad con el artículo 5 de la Ley N° 31595, es el OEFA la entidad encargada de ejercer la potestad sancionadora en materia ambiental por el incumplimiento de la obligación del retiro del cableado en mal estado o en desuso, mediante la imposición por el monto comprendido entre 5 y 20 UIT.

Asimismo, en atención al artículo 4 de la citada ley señalada en el párrafo precedente, es la municipalidad competente que cuenta con la facultad de fiscalizar y sancionar en el marco de sus competencias señaladas en el artículo 46 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Procedimiento administrativo sancionador (artículo 12 del reglamento)

En el artículo 12 del proyecto de reglamento se establece que el procedimiento administrativo sancionador se rige por lo establecido en la Ley N° 27444 y por las normas de procedimientos administrativos sancionadores en materia ambiental.

Por otra parte, es oportuno mencionar que el presente artículo aplica a las entidades que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del artículo 2 del proyecto de Reglamento. Sobre el particular, el OEFA ejerce la potestad sancionadora en materia ambiental por el incumplimiento de la obligación del retiro

del cableado en mal estado o en desuso y las municipalidades cuentan con facultad sancionadora en aspectos de su competencia que señala la Ley Orgánica de Municipalidades.

Adicionalmente, es importante mencionar que el MTC no cuenta con competencias para imponer sanciones a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y a los proveedores de infraestructura pasiva por el incumplimiento del artículo 3 de la Ley N° 31595, debido a que tal competencia le ha sido atribuida por la referida Ley al OEFA.

Coordinación con los Organismos reguladores (Primera DCF del reglamento)

De ser el caso, las autoridades señaladas en este artículo coordinarán con los organismos reguladores respectivos, conforme a sus competencias.

El artículo 4 de la Ley 31595 establece que, de ser el caso, las autoridades señaladas en este dicho artículo coordinarán con los organismos reguladores respectivos, conforme a sus competencias. Es por ello, que la presente disposición complementaria indica que las municipalidades, el OEFA y el MTC podrán coordinar con el Osinergmin y el OSIPTEL, sobre aspectos relacionados a la prestación del servicio de electricidad o telecomunicaciones, según corresponda, en el proceso de retiro de cableado en mal estado o en desuso.

Esta disposición resulta relevante, especialmente en la identificación del cableado en mal estado, que podría ser una infraestructura que se encuentra prestando servicio, lo que implica que dicho cableado deberá ser reemplazado por uno nuevo o en mejores condiciones, y hace necesaria la coordinación con el órgano regulador competente, a fin de definir la posible afectación del servicio, entre otros riesgos potenciales.

Cabe indicar que la presente disposición, es independiente de la obligación de los concesionarios de servicios públicos, de cumplir con la normativa sectorial correspondiente referida al reporte de interrupciones, averías, mantenimientos y la regulación sobre la calidad del servicio.

Supervisión y fiscalización por parte de los Organismos Reguladores (Segunda DCF del reglamento)

En el marco de las facultades establecidas en materia tarifaria en cuanto a la prestación de los servicios públicos de electricidad y de telecomunicaciones, otorgada a los órganos reguladores, a través de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, se propone que el OSIPTEL y el OSINERGMIN supervisen que las empresas concesionarias no trasladen los costos que involucren el retiro del cableado en mal estado o en desuso, a las tarifas de los usuarios; esto, según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 31595.

Por su parte la presente disposición complementaria final propone también que la supervisión, fiscalización y sanción de los relacionado a los aspectos técnicos y de seguridad de la infraestructura eléctrica sonde competencia de OSINERGMIN.

Manejo de los residuos sólidos (Tercera DCF del reglamento)

Mediante el artículo 55 del Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se establece que los generadores de residuos sólidos son

responsables por el manejo seguro, sanitario y ambientalmente adecuado. En esa misma línea, el artículo 46° del Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM establece que el manejo de los residuos sólidos se deberá realizar a través de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (EO-RS), considerando que los cables son residuos no municipales.

En esa misma línea, los residuos principalmente podrán ser valorizados, ello en línea con el artículo 48 del Decreto Supremo N°001-2022-MINAM “Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, y el Reglamento de la Ley N° 29419, Ley que regula la actividad de los recicladores, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2010-MINAM”, en donde se indica que una de las obligaciones del generador no municipal es establecer estrategias y desarrollar acciones orientadas a la prevención y/o minimización y/o valorización de residuos sólidos.

Sobre la Transferencia de funciones de fiscalización ambiental (Primera DCT del reglamento)

La Primera Disposición Complementaria Transitoria del proyecto de reglamento señala que las funciones de fiscalización ambiental del sector Comunicaciones que a la fecha ejerce el MTC son transferidas al OEFA, conforme al cronograma de transferencias que se apruebe, en el marco de lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 29325, Ley del Sinefa.

En esa línea, es oportuno mencionar que cuando se efectúe la transferencia de competencias de fiscalización ambiental del sector comunicaciones al OEFA, en el caso específico de la fiscalización del régimen de la Ley N° 31595, el MTC solo podrá transferir al OEFA la competencia de supervisión ambiental de la obligación de retiro de cableado, teniendo en consideración de que la potestad sancionadora sobre esta materia ya se encuentra asignada al OEFA por el artículo 5 de la Ley N° 34595.

Supervisión orientativa (Segunda DCT del reglamento)

En el marco de lo dispuesto en el numeral 245.2 del artículo 245 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO del LPAG) establece que las entidades fiscalizadoras procurarán realizar fiscalizaciones con una finalidad orientativa, para identificar los riesgos y notificar alertas a los administrados contribuyendo a que estos puedan mejorar su gestión.

En ese sentido, en el caso del OEFA, la supervisión orientativa se encuentra regulada en el artículo 13 del Reglamento de Supervisión del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA-CD, la cual tiene objeto la promoción del cumplimiento de obligaciones fiscalizables y se realiza a través de la puesta en conocimiento de las obligaciones a los administrados y una verificación del cumplimiento sin fines punitivos, en concordancia con los principios preventivo y correctivo y de promoción del cumplimiento, reconocidas en la citada resolución. Por tal sentido, se propone su aplicación en el régimen de fiscalización ambiental de la obligación establecida en la Ley N° 31595, a fin de que tanto el OEFA como el MTC contribuyan a que las empresas concesionarias de servicios de electricidad y de telecomunicaciones y aquellas que proveen infraestructura pasiva de telecomunicaciones cumplan con el retiro del cableado

en mal estado o en desuso antes del vencimiento del plazo establecido por la m Ley N° 31595.

VII. ANÁLISIS DE IMPACTOS CUANTITATIVOS Y/O CUALITATIVOS DE LA NORMA

En la década de los 90 en el Perú se pensaba que solo la energía eléctrica y el agua potable eran servicios de necesidad básica, sin embargo, los servicios públicos de las telecomunicaciones se han constituido también en un servicio esencial y de gran demanda en nuestro país; debido a que actualmente no existe sociedad que no reconozca el valor múltiple e importancia de los servicios públicos de telecomunicaciones en esencial del servicio de telefonía móvil e internet, el cual tiene como fin último mejorar la calidad de vida de la persona al permitirle contar con información actualizada de todo el mundo y establecer contacto en simultáneo desde cualquier lugar, suministrando de esta manera información para la toma de decisiones económicas, educativas, sociales, políticas, etc.; más aún en situaciones de emergencia.

En ese sentido, la necesidad de la provisión de los servicios públicos de telecomunicaciones y de electricidad, relacionada a la expansión de su infraestructura, específicamente el cableado aéreo; cuyo avance, a la par del crecimiento de la demanda de los servicios públicos y conjuntamente con el crecimiento poblacional y desarrollo económico, no han previsto el crecimiento desordenado del cableado aéreo en las zonas urbanas del país; la cual ha generado contaminación visual, impactos ambientales negativos, daños en el patrimonio urbanístico, histórico y cultural, y poniendo en riesgo la vida de las personas que trabajan o transitan por la zona.

Esta situación crítica nos lleva a reflexionar sobre las condiciones en la que vivimos y se brinda los servicios de telecomunicaciones y de electricidad, así como a cuestionar si estaría justificada la permanencia de cables en los espacios públicos con los que contamos en la ciudad; asimismo, nos lleva a preguntarnos si las normas son suficientes para poder regular el retiro y reubicación del cableado aéreo, o si hay una deficiente supervisión, fiscalización y sanción sobre cableado aéreo a las empresas de telecomunicaciones y eléctricas, por parte de las municipalidades u organismos competentes.

En este contexto, se han evaluado las siguientes alternativas de solución para la problemática analizada:

Alternativa de solución 1

La alternativa 1 se relaciona con la no intervención del Estado, lo que implica la no reglamentación de la Ley 31595. En esta alternativa, no se cumple con lo dispuesto en la Ley 31595 y, en consecuencia, no se regula el retiro de cableado aéreo en desuso o en mal estado.

Al respecto, considerando que se prevé el incremento del despliegue de infraestructura siga en aumento tanto en el sector eléctrico como en el de telecomunicaciones. Por ejemplo, en cuanto al sector eléctrico, si bien el porcentaje de personas con acceso a servicio eléctrico a través de una red pública alcanza al 96.2% de la población, aún existen localidades sin servicio eléctrico en el área urbana (1%). En cuanto al sector telecomunicaciones, se observa una brecha aún más pronunciada, pues el acceso a servicios como el internet fijo no alcanza a toda la población, toda vez que al 2021 solo el 39.4% de los hogares contaba con internet fijo (Osiptel, 2021)⁶; asimismo el 19.3% de las localidades urbanas no cuentan con cobertura de servicio móvil, por lo que se prevé que se despliegue infraestructura que comprenda, entre otros, infraestructura de cableado aéreo.

Bajo este escenario, toda vez que no hay nuevos incentivos para el cambio en el tratamiento de estos cables por parte de las empresas titulares, el problema de la presencia de cableado aéreo o en desuso persistirá.

Cuadro N° 01
Alternativa 1: No reglamentar la Ley 31595 y mantener el *statu quo*

	Estado	Población	Empresas
Ventajas	No genera gastos adicionales al presupuesto del sector público.	No se han identificado.	No tendrían que incurrir en los gastos asociados a la identificación, desconexión y eliminación adecuada de los cables aéreos en mal estado o en desuso, lo que podría implicar un ahorro económico a corto plazo.
Desventajas	No se cumple con lo dispuesto en la Ley 31595, sin contar con disposiciones que desarrollen el tratamiento del retiro de cableado aéreo de telecomunicaciones y de energía eléctrica. Ineficiencias y dificultades para la planificación urbana y la modernización de la infraestructura de	Posibles riesgos por interrupciones del servicio o de la vía relacionados al cableado aéreo en mal estado. Riesgos de seguridad, como cortocircuitos y posibles accidentes. Contaminación ambiental.	Limita su capacidad para adoptar nuevas tecnologías y brindar servicios más avanzados y de mejor calidad, debido a una infraestructura obsoleta.

⁶ Osiptel (2021). Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL) – 2021. Disponible en <https://repositorio.osiptel.gob.pe/handle/20.500.12630/808>

	telecomunicaciones y de energía eléctrica.		
--	--	--	--

Elaboración: MTC-DGPRC

La alternativa de solución 2

Se analiza la opción de autorregulación como alternativa para abordar los problemas relacionados con el cableado aéreo en desuso o en mal estado. La autorregulación implica que las empresas establezcan por iniciativa propia procedimientos, plazos y límites para mitigar los efectos negativos de este cableado. Esto incluye identificar y retirar o reparar el cableado en desuso o en mal estado en áreas urbanas.

Cabe señalar que entre los principales efectos negativos de la presencia de cableado en mal estado o en desuso se encuentra el riesgo de seguridad, como posibles accidentes, cortocircuitos, entre otros; asimismo, resalta la contaminación ambiental.

En el caso de los riesgos de accidentes asociados al cableado aéreo, es importante tener en cuenta que este problema es característico en los mercados de distribución eléctrica⁷ y telecomunicaciones, donde existe cierto poder de mercado debido a características de monopolio natural u oligopolio respectivamente. Los afectados, que suelen ser personas naturales, podrían enfrentar procesos legales largos y costosos, mientras que las empresas tienen más recursos y personal para seguir estos procedimientos. Esto podría desincentivar a las empresas a tomar medidas preventivas y optar por los procesos legales.

En cuanto a la contaminación visual causada por el cableado aéreo en desuso o en mal estado en zonas urbanas, es necesario considerar que el valor visual del entorno es un bien público (Pérez, 2016⁸). Las empresas no valoran este bien de la misma manera que la población, lo que significa que no tienen incentivos para destinar los recursos necesarios para contrarrestar este efecto negativo.

⁷ Especialmente, puede suscitarse en la etapa de la “última milla”, es decir, la etapa final de la infraestructura de comunicación utilizada para proporcionar servicios de telecomunicaciones a los usuarios finales.

⁸ Pérez, F. (2016). Medio ambiente, bienes ambientales y métodos de valoración. Equidad y Desarrollo, 25, pp. 119-158. DOI: <https://doi.org/10.19052/ed.3725>

Cuadro N° 02
Alternativa 2: Autorregulación por parte de las empresas operadoras

	Estado	Población	Operadores
Ventajas	Podría ahorrar los gastos de fiscalización y supervisión, tanto por parte de los organismos reguladores como de municipalidades.	No se han identificado.	No tendrían que incurrir en los gastos asociados a la identificación, desconexión y eliminación adecuada de los cables aéreos en mal estado o en desuso, lo que podría implicar un ahorro económico a corto plazo.
Desventajas	No se cuente con disposiciones que desarrollen el retiro de cableado aéreo de telecomunicaciones y de energía eléctrica. Ineficiencias y dificultades para la planificación urbana y la modernización de la infraestructura de telecomunicaciones y de energía eléctrica.	Posibles riesgos por interrupciones del servicio o de la vía relacionados al cableado aéreo en mal estado. Riesgos de seguridad, como cortocircuitos y posibles accidentes. Contaminación ambiental.	Limita su capacidad para adoptar nuevas tecnologías y brindar servicios más avanzados y de mejor calidad, debido a la persistencia de una infraestructura obsoleta.

Elaboración: MTC-DGPRC

La alternativa de solución 3

La alternativa de solución 3 está relacionada a la reglamentación de la Ley 31595. En ese sentido, la propuesta normativa establece disposiciones que regulan la

identificación y retiro del cableado en desuso de los servicios públicos de telecomunicaciones en las zonas urbanas del país.

La propuesta normativa permitirá al estado cumplir con las disposiciones normativas vigentes, así como optimizar el espacio público de la infraestructura existente, lo que permite facilitar la instalación de nueva infraestructura o realizar mejoras tecnológicas en la infraestructura existente, a su vez, se pueda brindar mejores servicios públicos a la población.

Cuadro N° 03
Alternativa 3: Reglamentación la Ley 31595

	Estado	Población	Operadores
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> · Contar con un marco regulatorio del tratamiento del cableado aéreo de telecomunicaciones y de energía eléctrica, haciendo los procesos de fiscalización claros y predecibles. · Busca el desarrollo ordenado del ambiente urbanístico. · Optimizar el uso del espacio público. · Permitir una mejor planificación urbana y facilitar la instalación de nuevas infraestructuras, tecnologías de telecomunicaciones más avanzadas, redes de fibra óptica y otros servicios públicos necesarios. 	<ul style="list-style-type: none"> · Mejora en la seguridad, pues reduce los riesgos de accidentes y daños materiales. · Asimismo, disminuye significativamente la contaminación visual en los entornos urbanos, creando un entorno más limpio, ordenado y seguro. Una estética urbana mejorada puede fomentar el turismo y promover el desarrollo económico de estas localidades. · Promueve la optimización del espacio público en la medida de que el retiro de cable aéreo en desuso o en mal estado, libera espacio para la implementación de otros servicios públicos, tales como video vigilancia, iluminación, entre otros. 	<ul style="list-style-type: none"> · Permitirá disminuir los costos operativos y de mantenimiento a mediano y largo plazo. · El retiro de cables aéreos en desuso o mal estado contribuye a reducir los riesgos asociados con daños o fallas en la infraestructura operativa. · Busca el adecuado tratamiento del cableado en desuso, se podrían recuperar algunos materiales valiosos, que podrían contribuir comercializar.

Desventajas	<ul style="list-style-type: none"> Costos económicos relacionados a la supervisión y fiscalización de lo dispuesto por el proyecto normativo. 	<ul style="list-style-type: none"> Posibles desvíos del tránsito, incluso interrupciones temporales de servicios de telecomunicaciones y/o de energía eléctrica. No obstante, el reglamento prevé, de corresponder, la participación de los órganos reguladores; así el retiro se gestiona de forma responsable, minimizando los posibles impactos que pudieran causar a la población. 	<ul style="list-style-type: none"> Costos involucrados a la identificación, desconexión y eliminación adecuada de los cables aéreos en mal estado o en desuso
-------------	--	---	--

Elaboración: MTC-DGPRC

La alternativa de solución 1 no se considera como la mejor solución en tanto que, con la regulación actual persiste la problemática de la existencia de cableado aéreo en desuso o en mal estado en zonas urbanas del país.

Del mismo modo, la alternativa 2, se advierte que las empresas titulares del cableado aéreo no tienen incentivos suficientes para poder autorregularse e implementar procedimientos que permitan la identificación y retiro de este tipo de cableado.

En tanto, con la alternativa de solución 3, se benefician tanto el Estado como la población y las empresas titulares del cableado aéreo, toda vez que permitiría que se pueda eliminar exceso de cableado aéreo en desuso o en mal estado, que permite al estado propiciar un ambiente urbano más ordenado, donde se optimice el espacio público y lograr una mejor planificación urbana; asimismo, la población podría disfrutar de una menor contaminación visual y mitigar los riesgos accidentes y daños materiales, por su parte, las empresas pueden disminuir sus costes de operación y mantenimiento de la infraestructura de cableado aéreo en el largo plazo.

Por estas razones, evaluando las soluciones mencionadas en los párrafos precedentes, se debe optar por aquella solución que permita disminuir el problema público de acceso y uso de los servicios móviles, resultando más oportuno escoger la alternativa de solución 3. En ese sentido, se propone la reglamentación de la Ley 31595, lo cual conlleva a los siguientes beneficios y costos para el Estado, la población y las empresas interesadas, respectivamente.

Análisis Costo Beneficio

Para el estado:

Beneficios:

Con la reglamentación de la Ley 31595, el estado podría tener un marco normativo claro que permita establecer disposiciones que regulen la identificación y retiro de las redes de cableado aéreo en desuso o en mal estado, de los servicios de electricidad y telecomunicaciones en las zonas urbanas del país. Dichas disposiciones posibilitan que el estado pueda realizar acciones de fiscalización más eficientes que permitan velar por su cumplimiento, lo que a su vez, contribuirá a garantizar una mayor calidad en los servicios de telecomunicaciones y energía eléctrica.

Asimismo, al contar con normas específicas para la instalación y mantenimiento del cableado aéreo, se podrán establecer pautas y criterios que respeten la estética y el entorno de las áreas urbanas. Esto contribuirá a evitar la proliferación desorganizada de cables, postes y estructuras que puedan afectar negativamente el paisaje urbano, brindando así una mayor armonía visual en las ciudades.

De este modo, una mejor planificación urbana facilitará la instalación de nuevas infraestructuras, tecnologías de telecomunicaciones más avanzadas, redes de fibra óptica y otros servicios públicos necesarios. Al contar con un marco normativo claro y transparente, se fomentará la inversión en infraestructuras de telecomunicaciones y energía eléctrica, lo que redundará en un desarrollo más rápido y eficiente de dichos sectores.

Costos:

La reglamentación de la Ley 31595 también requerirá destinar recursos para llevar a cabo las acciones de supervisión y fiscalización de las actividades relacionadas con el cableado aéreo en desuso o mal estado de telecomunicaciones y de energía eléctrica. Esto implica la necesidad de contar con personal capacitado y especializado en la materia, así como con equipos y herramientas adecuados para realizar inspecciones y verificaciones del cumplimiento las disposiciones normativas.

Para la población**Beneficios:**

La reglamentación de la Ley 31595 presenta diversos beneficios para la población, entre los que resaltan: mejora en la seguridad, ya que al eliminar los cables aéreos en desuso o en mal estado se reducen los riesgos de accidentes y daños materiales. Esto es especialmente relevante en entornos urbanos, donde la presencia de cables expuestos puede representar un peligro para peatones y conductores.

Al retirar los cables aéreos, se crea un entorno más limpio, ordenado y seguro. Esta mejora estética en las áreas urbanas puede tener un impacto positivo en el turismo, al ofrecer un ambiente más agradable y atractivo para los visitantes.

Por otro lado, la eliminación de los cables aéreos en desuso o deteriorados libera espacio que puede ser utilizado para la implementación de otros servicios públicos. Por ejemplo, estos espacios pueden ser destinados a la instalación de sistemas de video vigilancia, mejoras en la iluminación o la implementación de infraestructuras necesarias para la prestación de servicios básicos.

Costos:

A pesar de ello, el proceso de retiro o reparación de los cables aéreos en desuso o en mal estado, puede generar interrupciones temporales de servicios de telecomunicaciones y/o de energía eléctrica. No obstante, el reglamento prevé, de corresponder, la participación de los órganos reguladores y entidades municipales a fin de que el retiro se gestione de forma responsable, minimizando los posibles impactos que pudieran causar a la población.

Para las empresas

Beneficios:

Considerando que los cables en desuso o mal estado constituyen un peligro potencial para la integridad de la infraestructura, tanto del cableado en buen estado como de los elementos de sujeción, lo que puede ocasionar interrupciones en los servicios que ofrecen las empresas operadoras.

En ese sentido, el cumplimiento de lo dispuesto en la reglamentación permitirá que las empresas operadoras se beneficien toda vez que les permite la disminución de los costos operativos y de mantenimiento en el mediano y largo plazo, toda vez que permiten reducir los riesgos asociados con daños o fallas en la infraestructura operativa.

Costos:

Ahora bien, las empresas operadoras pueden incurrir en costos asociados a la identificación, desconexión y eliminación adecuada de los cables aéreos en mal estado o en desuso. No obstante, existe la posibilidad de poner en valor parte de estos desechos por medio de la venta de algunos materiales reciclables, que puede servir de insumo para la producción de otros bienes y servicios (Vermesan, Tiuc & Pucar, 2020⁹). En particular, del reciclaje de cables eléctricos o de

⁹ Vermesan, H.; Tiuc, A. & Pucar, M. (2020). Advanced Recovery Techniques for Waste Materials from IT and Telecommunication Equipment Printed Circuit Boards.

telecomunicaciones, se pueden obtener materiales valiosos como, entre otros, el cobre, aluminio, acero, e incluso el plástico (Li, et al., 2017¹⁰; Yoshima et al., 2004¹¹).

Finalmente, los costos que podrían surgir para la sociedad son considerablemente menores en comparación con los beneficios que se generarán mediante la propuesta normativa. Esto se debe a que el Estado contará con un marco normativo que permitirá llevar a cabo labores de fiscalización y promover el cumplimiento de la norma. Como resultado, se espera crear un entorno urbano más ordenado, optimizando el espacio público y logrando una mejor planificación urbana. Además, la población se beneficiará al disfrutar de una reducción en la contaminación visual y una disminución en el riesgo de sufrir accidentes o electrocuciones, entre otros peligros.

Por otro lado, aunque las empresas operadoras pueden incurrir en costos relacionados con la identificación y el retiro de cableado aéreo a corto plazo, a medio y largo plazo podrían reducir los costos operativos asociados al mantenimiento de esta infraestructura. En base a lo expuesto, se puede inferir que los beneficios derivados de la propuesta normativa superan ampliamente sus costos, lo que la hace viable y digna de aprobación.

VIII. ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

El presente reglamento da cumplimiento al mandato de la Única Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 31595, Ley que promueve la descontaminación ambiental y establece el retiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado en las zonas urbanas del país.

El reglamento generará un importante efecto en el ordenamiento jurídico, ya que presenta las disposiciones de desarrollo de la Ley 31595.

IX. ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO

Al respecto, se debe tener en cuenta que el 28 de mayo de 2023 se publicó el Decreto Legislativo N° 1565 que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria, cuya única disposición complementaria regulatoria derogó el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, que estableció instrumento para la mejora de la calidad regulatoria el Análisis de Impacto Regulatorio.

Sin perjuicio de lo señalado, la segunda disposición complementaria final del Decreto Legislativo N° 1565, dispuso que en tanto se apruebe su reglamento, continúa vigente el Reglamento que desarrolla el Marco Institucional que rige el Proceso de Mejora de la Calidad Regulatoria y establece los Lineamientos Generales para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, aprobado por Decreto Supremo N° 063-2021-PCM (en adelante, Reglamento RIA)

¹⁰ Li, L.; Liu, G.; Wang, W.; Wu, Y. & Zuo, T. (2017). Overview of the recycling technology for copper-containing cables. *Resources, Conservation and Recycling*, 126, pp. 132-140. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.07.024>

¹¹ Yoshima *et al.* (2004). Environmental Material Management for Outdoor Telecommunication Network Systems. *Transactions of the Materials Research Society of Japan*, 29 (5), pp. 1777-1779.

Conforme los artículos 6 al 8 del Reglamento del AIR Ex Ante, las entidades del poder ejecutivo, previo a la elaboración de disposiciones normativas de carácter general, deben adoptar el instrumento para la mejora de calidad regulatoria denominado “análisis de impacto regulatorio ex ante” (en adelante, AIR Ex ante).

Al respecto, el artículo 3 del referido reglamento define que el AIR Ex ante es un proceso que permite el análisis previo, sistemático e integral para identificar, evaluar y medir los probables resultados, beneficios y costos de distintas alternativas de solución (regulatorias y no regulatorias) de un problema público, considerando la identificación y el análisis de riesgos, con el fin de adoptar la mejor alternativa de intervención en base a evidencia.

Además conforme el numeral 10.1 del artículo 10 del referido reglamento establece el ámbito de aplicación del AIR Ex ante, y señala que la entidad pública del Poder Ejecutivo tiene la obligación de realizar el AIR Ex Ante previo a la elaboración de disposiciones normativas de carácter general, cuando establezcan, incorporen o modifiquen reglas, prohibiciones, limitaciones, obligaciones, condiciones, requisitos, responsabilidades o cualquier exigencia que genere o implique variación de costos en su cumplimiento por parte de las empresas, ciudadanos o sociedad civil que limite el otorgamiento o reconocimiento de derechos para el óptimo desarrollo de actividades económicas y sociales que contribuyan al desarrollo integral, sostenible, y al bienestar social.

La propuesta de reglamento de la Ley 31595 tiene por objeto establecer disposiciones que regulen la identificación y retiro de las redes de cableado aéreo en desuso o en mal estado, de los servicios de electricidad y de telecomunicaciones, en las zonas urbanas del país, dentro de los alcances de la Ley N° 31595, Ley que promueve la descontaminación ambiental y establece el retiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado en las zonas urbanas del país, con enfoque en gestión ambiental y seguridad de las personas.

En ese sentido, dado que el proyecto normativo constituye una norma de carácter general que establece obligaciones que generan variación de costos en su cumplimiento por parte de las empresas de telecomunicaciones (en concreto, se regula el procedimiento de identificación y retiro del cableado en mal estado o desuso por parte de las empresas de telecomunicaciones y electricidad), lo cual repercute en el desarrollo de las actividades económicas de dichas empresas, corresponde realizar el AIR Ex Ante de dicho proyecto normativo, y remitir el expediente correspondiente a la , la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria (CMCR) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).